

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 11 de noviembre de 2020

AUTO No. \_\_\_\_\_.

MAGISTRADO PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76111-33-33-002-2018-00113-01
DEMANDANTE:	EDWIN HORACIO VALENCIA QUINTERO <a href="mailto:Romeiro11@hotmail.com">Romeiro11@hotmail.com</a>
DEMANDADO:	RAMA JUDICIAL Y OTROS <a href="mailto:dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co">dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co">jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co</a> <a href="mailto:prejudiciales@mindefensa.gov.co">prejudiciales@mindefensa.gov.co</a> <a href="mailto:deval.notificacion@policia.gov.co">deval.notificacion@policia.gov.co</a>
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO QUE NIEGA DECRETO DE PRUEBAS.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto de fecha 19 de febrero de 2020, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, mediante el cual negó el decreto y practica de las pruebas solicitadas en el literal c) del capítulo de pruebas del escrito demandatorio<sup>1</sup>.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, el señor Edwin Horacio Valencia Quintero y otros demandaron a la Rama Judicial y otros, para que se declare responsable por los daños y perjuicios ocasionados al señor Edwin Horacio Valencia Quintero como consecuencia de la detención efectuada el 26 de noviembre de 2015.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto del 19 de febrero de 2020 proferido en audiencia inicial<sup>2</sup>, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga negó el decreto y practica de las pruebas solicitadas en el literal c) del capítulo de pruebas del escrito demandatorio (Min:14:44:18).

Negó la solicitud de oficiar al INPEC y al Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga para que alleguen una serie de pruebas por cuanto el inciso 3º del artículo 173 del CGP dispone que: *“el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por intermedio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite”*.

<sup>1</sup> Folio 29

<sup>2</sup> Folio 38

Consideró que el apoderado de la parte demandante pretende trasladar el trámite para obtener pruebas, omitiendo lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 78 del CGP que dice que los apoderados *“deben abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho e petición hubieren podido conseguir”*.

#### IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra el auto del 19 de febrero de 2020 proferido en audiencia inicial por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga. Argumentó que se está vulnerado el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues si bien el juzgador manifestó que a través de un derecho de petición se pueden solicitar las pruebas, muchas veces los juzgados no permiten eso. En consecuencia, reiteró la solicitud de la prueba trasladada, y dijo que inclusive el CGP permite que el juez la decrete de oficio (Min:14:49:84).

#### V. CONSIDERACIONES:

##### 5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, contra el auto que niega el decreto o la práctica de una prueba procede el recurso de apelación, y el Tribunal es competente en segunda instancia.

**Art. 243.-** Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

##### 5.2. Problema Jurídico

El asunto que se discute se contrae a establecer si la decisión proferida por el *A-quo* que negó el decreto de las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante se encuentra ajustada a derecho, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 78 y el inciso segundo del artículo 173 del CGP.

Para resolver el problema jurídico, el Despacho analizará: (i) las generalidades de las pruebas, (ii) la carga de la prueba y (iii) el caso concreto.

##### 5.3. Tesis del despacho

El Despacho confirmará la decisión tomada por el *A-quo*, pues, de conformidad con el numeral 10 del artículo 78 y el inciso segundo del artículo 173 del CGP, corresponde al demandante allegar las pruebas documentales que puedan ser adquiridas de manera directa o a través de derecho de petición, al menos que se demuestre que la solicitud no fue atendida.

## 5.4 Generalidades de la prueba

Para establecer la pertinencia, conducencia y procedencia de las pruebas solicitadas, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 167, 168 y 169 del Código General del Proceso, los cuales son del siguiente tenor:

Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

“(…)”

Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Artículo 169. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. “(…)”.

El Consejo de Estado (2019)<sup>3</sup> definió el concepto de pertinencia, contundencia, utilidad y licitud en los siguientes términos:

Atendiendo a que, conforme con el criterio jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en las providencias citadas *supra*, para analizar si una prueba es legalmente prohibida o ineficaz, o si versa sobre hechos notoriamente impertinentes o es manifiestamente superflua, se debe verificar si cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud.

Conforme a la jurisprudencia señalada *supra*, se considera que para verificar: **i) la pertinencia** de una prueba se debe revisar que el hecho que se pretende probar guarde relación con el objeto del proceso; **ii) la conducencia** de una prueba se debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar<sup>4</sup>; **iii) la utilidad** de una prueba se debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba<sup>5</sup>; y **iv) la licitud** de la prueba se debe revisar que no haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de diciembre de 2019, radicación nro. 11001-03-24-000-2011-00056-00.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B providencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00460-02.

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

<sup>6</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia de 11 de abril de 2018. M.P. Eugenio Fernández Carlier, número único de radicación 43533. “[...]en la jurisprudencia se ha distinguido desde hace tiempo entre prueba ilegal y prueba ilícita, división con la que se alude, en el primer caso, a aquéllas que padecen yerros en las formas propias de ordenación, práctica y/o incorporación a la actuación (debido proceso probatorio), y en el segundo, a aquéllas obtenidas, en general, con desconocimiento de las garantías fundamentales de las personas, por ejemplo, por violación de los derechos a la no autoincriminación, a la solidaridad íntima, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, etc. [...]”.

Ahora bien, el artículo 212 del CPACA manifiesta que las pruebas pueden ser apreciadas por el juzgador cuando son solicitadas, practicadas e incorporadas al proceso dentro del término y oportunidad señalados. De manera textual dispone:

Para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas...

### 5.5 Carga de la prueba

El inciso 4 del artículo 103 del CPACA dispone que *“Quien acuda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este código”*.

A su vez, el artículo 167 del CGP expuso que: *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*.

Y el numeral 1 del artículo 78 preceptuó:

Artículo 78. Son deberes de las partes y sus apoderados:

[...]

10. Abstenerse de solicitar al juez la consecuencia de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir.

Igualmente, el inciso segundo del artículo 173 del CGP indicó:

[...] El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiere sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

Sobre la carga de la prueba, el Consejo de Estado (2011)<sup>7</sup> dijo que corresponde al actor demostrar los supuesto facticos en los cuales fundamenta las pretensiones, así:

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil consagra el principio de la carga de la prueba, que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción. Y de acuerdo con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”. Ahora bien, como lo ha manifestado la jurisprudencia nacional en materia de la carga de la prueba, para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2011, radicado nro. 05001-23-26-000-1994-02376-01(18048).

las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación; pues ninguna de las partes goza de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes, la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la demandante, debe anotarse que quien presenta el libelo demandatorio sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos. Sobre la carga de la prueba esta Corporación explicó: “En procesos contenciosos o controversiales como el presente, el juez no puede adoptar decisiones que no estén fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se incurriría en una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, así como también se estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que resulte afectado...”.

## 5.6. Caso concreto

El apoderado judicial de la parte demandante solicitó como pruebas documentales las siguientes:

OFICIAR: Al instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, de la ciudad de Buga-Valle, para que se sirva certificar el tiempo en que el señor EDWIN HORACIO VALENCIA QUINTERO, [...] estuvo privado de la libertad y por qué (sic) autoridad estuvo retenido [...].

OFICIAR: Al Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad de Buga- Valle, para que remita copias auténticas del expediente-Noticia Criminal No. 761116000165201502100, que aparece como indiciado el señor EDWIN HORACIO VALENCIA QUINTERO.

El Juzgado Segundo Administrativo de Buga, en la audiencia inicial del 19 de febrero de 2020<sup>8</sup>, negó el decreto y práctica de las pruebas solicitadas. Dijo que el numeral 10 del artículo 78 y el inciso segundo del artículo 173 del CGP determinaron que el juez se abstendrá de decretar las pruebas que podrían ser solicitadas directamente o por derecho de petición.

En el presente asunto, los documentos solicitados por el apoderado judicial de la parte demandante, certificado del INPEC y copias auténticas del proceso penal 761116000165201502100, pudieron ser gestionados a través de una petición ante dichas entidades, requisito que no fue acreditado y, por tanto, el apoderado no demostró la diligencia y observancia en el cumplimiento de sus deberes procesales, pues lo que busca el CGP es dejar en cabeza del interesado el deber de probar los hechos y pretensiones que alega, suministrando las pruebas que permitan que el proceso sea tramitado con celeridad, por tanto, dicha carga no puede ser trasladada al juez.

---

<sup>8</sup> Folio 32-40

RADICACIÓN : 2018-00113-01  
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA  
Demandante : EDWIN HORACIO VALENCIA QUINTERO  
Demandado : RAMA JUDICIAL Y OTROS



6

En consecuencia, el Despacho confirmará el auto del 19 de febrero de 2020, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga.

En consecuencia, se

### **RESUELVE**

**PRIMERO- CONFIRMAR** el auto proferido en audiencia inicial el 19 de febrero de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** En firme la presente decisión, remítase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

La magistrada,

**PATRICIA FEUILLET PALOMARES**  
**Magistrada**